BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES

Núm. 79

Día 12 de abril de 1978

INDICE

	<u>Páginas</u>		<u>Páginas</u>
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS			
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Alianza Popular, referente a la política sobre la "tercera edad".	1464	lar, sobre irregularidades en la creación y aprovechamiento de cotos privados de caza en La Coruña	1470
Solicitud de interpelación formulada por don Enrique Barón Crespo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre la actual situación del Programa Siderúrgico Nacional	1466	Pregunta formulada por doña María Victoria Fernández-España y Fernández-Latorre, del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, sobre la discriminación existente en Nueva York para los emigrantes gallegos en relación con las tarifas de vuelo	1470
Solicitud de interpelación que formula don Javier Solana Madariaga, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre política energética	1467	Contestación del Gobierno a la pregunta formulada por doña María Victoria Fernández-España y Fernández-Latorre, sobre prestación de asistencia sanitaria a los ancianos	1470
Pregunta que formula don Miguel Riestra Paris, del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, sobre concentración parcelaria y regadío en la zona del valle del Alto Arnoya	1468		
Pregunta que formula don Miguel Riestra Paris, del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, sobre el aprovechamiento de las aguas del "río pequeño", en Arnauiz (Orense)	1469	SENADO	
Pregunta formulada por doña María Victoria Fernández-España y Fernández-Latorre, del Grupo Parlamentario de Alianza Popu-		Despenalización del Adulterio y del Amancebamiento: Dictamen... ..	1473
		Aprobación por el Pleno del Senado del Anexo al Reglamento provisional de la Cámara, regulando la moción de censura y la cuestión de confianza	1475
		Informe de la Ponencia designada en el seno de la Comisión de Justicia e Interior sobre el proyecto de ley de Modificación de determinados artículos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal	1475

Páginas	Páginas
<p>Solicitud de interpelación formulada por don José Vicente Mateo Navarro, del Grupo Parlamentario Progresistas y Socialistas Independientes, sobre criterios del Gobierno en materia de opinión y expresión y cumplimiento de los Pactos de la Moncloa en punto a la reforma del Código de Justicia Militar 1475</p> <p>Pregunta que formula don José Vicente Mateo Navarro, del Grupo Parlamentario Progresistas y Socialistas Independientes, referente a la actual situación de los trámites para la elaboración del Catálogo de Parques Naturales 1476</p>	<p>Pregunta formulada por don José Vicente Mateo Navarro, del Grupo Parlamentario Progresistas y Socialistas Independientes, sobre el funcionamiento de los servicios postales durante la pasada Semana Santa 1477</p> <p>Pregunta formulada por don Celso Montero Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Senado, sobre el pago de indemnizaciones adeudadas por expropiaciones efectuadas a pequeños propietarios gallegos para la construcción de la Red de Carreteras "Accesos a Galicia" 1478</p>

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De conformidad con el artículo 139 del Reglamento vigente, la Mesa del Congreso de los Diputados, en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo anterior citado del Reglamento, ha acordado la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES, Congreso de los Diputados, de la proposición no de ley sobre la política en la "tercera edad" presentada por el Grupo Parlamentario de Alianza Popular, así como su remisión a la Comisión de Sanidad y Seguridad Social.

Durante el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente a su publicación, los señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a la citada proposición no de ley.

Palacio de las Cortes, 5 de abril de 1978.
El Presidente del Congreso de los Diputados, Fernando Alvarez de Miranda.

El Grupo Parlamentario de Alianza Popular, al amparo de lo establecido en los artículos 138 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, y con el ruego de

que sea incluida para debate, y en su caso aprobación, en un próximo Pleno, presenta la siguiente proposición no de ley, relativa a la política sobre la "tercera edad".

La población española que pasa de los sesenta o sesenta y cinco años y que, por tanto, puede ser incluida en lo que se viene llamando "tercera edad" sobrepasa ya el 12 por ciento. Crece de día en día como consecuencia de los más altos niveles de supervivencia, está constituida en su mayor parte por personas que han dedicado toda su vida al trabajo y plantea cada vez problemas más graves sociales y humanos, que van desde la insuficiencia económica, a la soledad o el sentido de frustración e inutilidad.

Los problemas que plantea la "tercera edad" son tan importantes que muchos programas políticos los incluyen entre los de carácter prioritario y muchos Gobiernos les conceden atención preferente desde muy diversos ángulos. Son problemas, además, que desgraciadamente no se amioran, sino que en muchas facetas se acrecientan con el desarrollo, y así hemos tenido ocasión de comprobarlo en países con

niveles de desarrollo muy superiores al nuestro.

En una enumeración sucinta de estos problemas señalaríamos:

- Una cierta anarquía en las edades de jubilación.
- La insuficiencia económica derivada en unos casos de la exigua cuantía de las pensiones, y en otros de su inexistencia.
- Los problemas específicos de salud.
- La imposibilidad de seguir viviendo en sus hogares o con sus hijos, muchas veces desplazados por consecuencia de su trabajo y en otras ocasiones con viviendas insuficientes.
- La sensación de soledad, al haber perdido a lo largo de su vida no sólo a muchos de sus familiares, sino también de sus compañeros y amigos, y no poder asistir normalmente a los lugares sociales de reunión y esparcimiento.
- El sentimiento de frustración e inutilidad, consecuencia de no tener una ocupación que les haga considerarse personal y socialmente útiles.
- El desafecto social y a veces familiar para quienes son el origen de la familia y de la sociedad.

Una política para la "tercera edad" es, por tanto, una política de muy amplio espectro, que no se limita a perfeccionamientos en la Seguridad Social, sino que comprende también acciones en materia de vivienda, transportes, espectáculos y empleo general del ocio, educación, etc. Hay países que, preocupados por este esencial problema del empleo del ocio creador y del desarrollo de la personalidad a cualquier edad, no han vacilado en crear dentro de las Universidades cursos especiales, es decir, lo que se ha dado en llamar Universidades para la tercera edad.

Por todas estas razones proponemos al Congreso que apruebe la siguiente proposición no de ley:

1.º Creación de una Comisión Parlamentaria especial para el estudio de los problemas de la tercera edad, y la pro-

puesta de las medidas legales y administrativas para resolverlos, medidas que comprenderán los aspectos relativos a jubilación, pensiones, residencias y clubs, empleo del tiempo libre, rehabilitación física, desarrollo cultural, atenciones sanitarias específicas y medidas de estímulo para la colaboración social.

2.º Que provisionalmente, y hasta tanto la citada Comisión ultime sus trabajos, el Gobierno adopte las medidas políticas adecuadas en orden a:

- Reconsiderar las edades de jubilación según las actividades y circunstancias personales.
- Atender los problemas de insuficiencia económica derivados de la exigüidad de muchas pensiones y de su falta total en casos de verdadera necesidad.
- Activar la construcción de residencias y clubs de jubilados.
- Crear servicios, y en su caso centros, especiales para la asistencia a los específicos problemas sanitarios de estos españoles.
- Realizar una política de viviendas especiales para matrimonios mayores de sesenta años.
- Facilitar su transporte y asistencia a lugares de esparcimiento.
- Desarrollar programas de actividades profesionales, culturales, etc., que mantengan en estas personas la ilusión de vivir y su consideración de socialmente útiles.
- Fomentar un programa de colaboración social para la asistencia a domicilio, compañía y ayuda en general a las actividades de nuestros mayores.

Esperamos del Congreso una actitud positiva para la consideración de esta proposición y en definitiva de solidaridad con quienes con su esfuerzo crearon las posibilidades de unas mejores condiciones de vida para todos, que es de justicia que ellos sean los primeros en aprovechar.

Madrid, 19 de marzo de 1978.—El Portavoz, **Manuel Fraga Iribarne**.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento vigente provisional del Congreso de los Diputados, de 17 de octubre de 1977, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES, Congreso de los Diputados, de la solicitud de interpelación que a continuación se inserta sobre programa siderúrgico nacional, de don Enrique Barón Crespo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Transcurridas dos semanas desde su presentación, se incluirá sin más en el orden del día de la primera sesión siguiente, con arreglo al artículo 126 del citado Reglamento.

Palacio de las Cortes, 5 de abril de 1978.
El Presidente del Congreso de los Diputados, Fernando Alvarez de Miranda.

A la Mesa del Congreso de los Diputados:

Enrique Barón Crespo, Diputado de Madrid por el Grupo Parlamentario Grupo Socialista del Congreso, tiene el honor de solicitar ante esa Mesa solicitud de interpelación, al amparo de los artículos 125 y siguientes del vigente Reglamento provisional del Congreso, sobre la actual situación del programa siderúrgico nacional, en relación con la situación del sector en España.

Antecedentes:

Es conocida la crisis por la que atraviesa el mercado de productos siderúrgicos a nivel mundial, y especialmente en Europa occidental, que se puede considerar como la más grave y profunda de las últimas décadas.

En esencia, las líneas vigentes en la ordenación y desarrollo del sector siderúrgico son las planteadas en el Programa Siderúrgico Nacional de 1971, año en que se convocó y resolvió el concurso de adjudicación de la IV planta siderúrgica integral, localizada en Sagunto. Las previsiones formuladas entonces, y sobre las cua-

les se construyó toda la evolución futura del sector, están hoy totalmente desfasadas por el drástico cambio de coyuntura señalado.

En el ejercicio de 1977 la situación de la siderurgia integral española se ha agravado aún más, por las dificultades generadas por la política de precios, las restricciones establecidas a la exportación y los fallos de gestión existentes en un sector carente de ordenación de conjunto.

Esta situación se ha traducido en pérdidas en todas las empresas, con un grado de endeudamiento elevado, que compromete seriamente de cara al futuro la actividad misma de alguna de las plantas. Dicha situación es conocida por el Gobierno, puesto que ha sido ya tratamiento de actuaciones parlamentarias y es del dominio de la opinión pública, especialmente en lo que respecta a la IV siderurgia integral de Sagunto, sobre cuya situación límite no se conoce hasta el momento ninguna decisión del ejecutivo.

Asimismo, la coexistencia de un sector privado y de un sector de empresa pública en la siderurgia ha provocado que la situación de esta última se agrave aún más, porque ésta se ha visto limitada en su expansión productiva al asignársele productos de bajo valor añadido.

De cara al presente ejercicio, la situación se agrava aún más, al mantenerse la tónica depresiva en el mercado mundial y al alcanzar su punto límite la situación interna de las principales empresas siderúrgicas integrales del país, con repercusiones que incluso pueden afectar no ya a un sector base de la economía nacional, sino incluso al prestigio y al crédito internacional de España.

Ante esta situación, otros países europeos han adoptado diversos tipos de medidas, que se ven facilitados en la mayor parte de ellos por su pertenencia a la CECA, pero que en cualquier caso han supuesto una activa política de sostenimiento del sector por el Estado, con fórmulas que van desde la subvención a la nacionalización.

Por último, el irracional crecimiento del sector ha llevado a la existencia de impor-

tantes estrangulamientos de las plantas existentes, que necesita de una política coordinada de cara al futuro, a medio y largo plazo, para conseguir el aprovechamiento debido de la capacidad instalada actual.

En consecuencia, los términos de la interpelación quedan precisados en los siguientes extremos:

¿Existe, y caso de que sea así, en qué estadio se encuentra el nuevo Programa Siderúrgico Nacional?

¿Qué medios de ayuda piensa arbitrar el Gobierno para resolver la actual situación del sector siderúrgico?

¿Qué decisiones piensa adoptar el Gobierno en relación con la IV planta siderúrgica integral Altos Hornos del Mediterráneo?

¿Cómo piensa orientar el Gobierno el futuro del sector siderúrgico, y qué participación considera que se debe dar en el mismo al Instituto Nacional de Industria?

Por todo ello, el Diputado firmante solicita que a la presente interpelación se le dé el oportuno trámite para su debate.

Palacio de las Cortes, 3 de marzo de 1978.—**Enrique Barón Crespo**.—El Portavoz del Grupo Socialista del Congreso, **Gregorio Peces-Barba**.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento vigente provisional del Congreso de los Diputados, de 17 de octubre de 1977, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES, Congreso de los Diputados, de la solicitud de interpelación que a continuación se inserta, en relación con la política energética, presentada por el señor Solana Madariaga, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

Transcurridas dos semanas desde su presentación, se incluirá sin más en el orden del día de la primera sesión siguien-

te, con arreglo al artículo 126 del citado Reglamento.

Palacio de las Cortes, 5 de abril de 1978. El Presidente del Congreso de los Diputados, **Fernando Alvarez de Miranda**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados:

Javier Solana Madariaga, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Grupo Socialista del Congreso, al amparo de lo previsto en los artículos 125 y siguientes del vigente Reglamento provisional del Congreso, presenta la siguiente interpelación al Gobierno:

El Acuerdo de la Moncloa preveía la presentación a las Cortes, antes del 31 de diciembre último, del Plan energético. Ha sido evidente la imposibilidad por parte del Gobierno de salvar las discrepancias de intereses que han desembocado finalmente en la crisis del Gabinete y, por tanto, en el incumplimiento del plazo pactado.

Mientras tanto, la política energética, y muy especialmente la política nuclear, concebida y realizada de forma anárquica y desvinculada de los objetivos públicos, sigue produciendo graves problemas en el orden político, social y ciudadano, habiendo hipotecado además en gran medida la posibilidad de realizar una auténtica política energética de acuerdo con criterios de eficacia y de satisfacción de las necesidades sociales.

Desgraciadamente, el margen de maniobra dejado a la incipiente democracia en materia energética es muy reducido: todo lo nuclear está ya construido o autorizado, atado y bien atado. Pero las actuaciones insolidarias no pueden poner en peligro los intereses de la sociedad y es preciso una respuesta clara y urgente del Gobierno con el fin de transformar la presente situación:

A) Con independencia de los problemas que cada uno de los sectores energéticos tiene planteados, el Grupo Parlamentario Socialista considera que la medida de crear una Empresa Nacional de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, por necesaria que sea para la racionaliza-

ción y optimización del sector eléctrico en su conjunto, resulta insuficiente, sin embargo, para que el país pueda llevar a cabo una política energética global que permita el logro de los objetivos a largo plazo, combinando la satisfacción de las necesidades energéticas domésticas e industriales con la exigencia de llevar a cabo cambios sustanciales en los patrones de producción y consumo energéticos.

Un control por parte del sector público de la generación de electricidad constituye un paso imprescindible, junto con el señalamiento de unos objetivos claros de funcionamiento a largo plazo, para evitar el predominio de los intereses privados sobre los públicos. Una solución intermedia como la propuesta para la red de alta tensión, sin perjuicio de insistir en su carácter necesario, no haría sino perpetuar la situación de dependencia de las empresas públicas respecto de las privadas, cuyo más claro exponente lo constituye la Empresa Nacional de Electricidad condenada a hacer cuantiosas inversiones en proyectos de aprovechamiento del carbón nacional (lignitos de Puentes de García Rodríguez y Teruel), pero obligada a vender toda su producción a las empresas privadas para su distribución.

B) Los siguientes puntos reflejan en concreto algunos de los problemas más importantes en el campo de la política electronuclear:

1. La política de ubicación de centrales nucleares se ha llevado a cabo con arreglo a los intereses exclusivos de las compañías eléctricas, sin un plan previo de emplazamientos posibles, sin participación de los intereses locales, sin escuchar los argumentos esgrimidos por las organizaciones políticas y ciudadanas, y, lo que es más grave, con una estrategia de hechos consumados frente a decisiones contrarias de los entes locales (véase Lemóniz, Ascó...).

2. La adquisición de centrales de tipos, fabricantes y países diversos ha convertido a nuestro país en un auténtico muestrario de centrales nucleares, impidiendo con ello aprovechar al máximo la capacidad de producción de la industria, generar

empleo y absorber tecnología nuclear. Y todo ello gracias al argumento, esgrimido a posteriori, de la diversificación de los riesgos que entrañaría elegir un solo tipo de central. Las políticas unificadoras como las llevadas a cabo en Francia y Alemania deberían servir para demostrar la falacia de esa afirmación.

3. Las dificultades y defectos existentes en las actuales centrales en construcción (Almaraz, Ascó) plantea el problema de las competencias institucionales en la vigilancia de las normas de seguridad, tanto en la construcción como en el funcionamiento de las centrales. El papel de la Junta de Energía Nuclear en la autorización de las centrales nucleares debería imponerse, por tratarse de un organismo técnico e independiente.

4. Los aspectos de reprocesado de los combustibles irradiados suscitan serios problemas para la continuidad del programa nuclear ya que todavía no se han desarrollado las técnicas oportunas a nivel industrial. Ello introduce una grave incertidumbre en la continuación del programa nuclear, obligando a almacenar el combustible irradiado (uranio empobrecido y plutonio) durante períodos superiores a diez años.

Palacio de las Cortes, 21 de marzo de 1978.—Javier Solana Madariaga.—El Portavoz del Grupo Socialista del Congreso, Felipe González Márquez.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento del Congreso de los Diputados se ordena la publicación de la pregunta que a continuación se inserta formulada por don Miguel Riestra Paris, del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, sobre problema de regadío del valle del Alto Arnoya.

Palacio de las Cortes, 5 de abril de 1978.
El Presidente del Congreso de los Diputados, Fernando Alvarez de Miranda,

Excmo. Sr.: Miguel Riestra Paris, Diputado por Orense del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, haciendo uso del derecho que le concede el artículo 128 y demás concordantes del Reglamento provisional del Congreso de Diputados, formula al Gobierno, por afectar a los Ministerios de Obras Públicas y de Agricultura, la siguiente pregunta, a la que pretende obtener respuesta por escrito de conformidad a lo establecido en el artículo 133 del susodicho Reglamento, pregunta a la que sirven de base los siguientes antecedentes:

El valle del Alto Arnoya tiene una superficie de 1.500 hectáreas, aproximadamente, comprendiendo los pueblos de Porto, Arnúiz, Calvelo, Jancín, Vide y parte de Baños de Molgas, sito o comprendiendo parte del Ayuntamiento de Baños de Molgas y especialmente de Villar de Barrio, terrenos y extensión que por el minifundio reinante están prácticamente improductivos, siendo unánime el deseo de todos los habitantes de dicha zona el que se acometa con la mayor urgencia la concentración parcelaria, primero, y su posterior regadío, ya que es de fácil realización y costo exiguo tanto una como otro.

Estando tan necesitada Galicia, y muy especialmente Orense, como región deprimida, de un mejor aprovechamiento, que en este caso sería muy rentable, tanto en el aspecto agrícola como ganadero, nosotros preguntamos: ¿Tiene conocimiento el Gobierno de esta situación, de los anhelos de concentración y regadío por la totalidad de los vecinos del valle del Alto Arnoya y, caso afirmativo, a qué se espera para iniciar la concentración parcelaria y conjuntamente estudiar el regadío de 1.500 hectáreas cuya rentabilidad agrícola y ganadera se está perdiendo lamentablemente?

Por lo anterior, suplico que, teniendo por presentado este escrito, se dé al mismo el trámite correspondiente, ordenándose su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES.

Todo lo cual firmo y rubrico, con el visto bueno del portavoz del Grupo en Ma-

drid, a 4 de abril de 1978.—**Miguel Riestra Paris.** — El Portavoz, **Manuel Fraga Iribarne.**

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación de la pregunta que a continuación se inserta formulada por don Miguel Riestra Paris, del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, sobre aprovechamiento de aguas del "río pequeño" en Arnúiz (Orense).

Palacio de las Cortes, 5 de abril de 1978.
El Presidente del Congreso de los Diputados, **Fernando Alvarez de Miranda.**

Excmo. Sr.: Miguel Riestra Paris, Diputado por Orense del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, haciendo uso del derecho que le concede el artículo 128 y demás concordantes del Reglamento provisional del Congreso de Diputados, formula al Gobierno, por afectar a los Ministerios de Obras Públicas y de Agricultura, la siguiente pregunta, a la que pretende obtener respuesta por escrito de conformidad a lo establecido en el artículo 133 del susodicho Reglamento, pregunta a la que sirven de base los siguientes antecedentes:

Arnúiz, pueblo sito en términos del Ayuntamiento de Villar de Barrio, de la provincia de Orense, es propietario de unas 400 hectáreas de comunal en el monte Medo, las cuales se hallan improductivas, y dada su situación escalonada en pequeños desniveles es susceptible de transformarse, de erial, en espléndido regadío, aprovechando las aguas del río que la bordea, denominado "río pequeño".

Es indudable que tal extensión convertida en praderío, para lo cual exigiría la desaparición de una pequeña zona repoblada en un 20 por ciento escasamente, y que prácticamente no es rentable, daría lugar a un notable incremento de la ganadería en la zona referenciada, con todas las ventajas que ello supone,

Teniendo conocimiento el Gobierno de esta situación, ¿ha tomado o piensa tomar alguna providencia en tal sentido?

Por lo anterior, suplico que, teniendo por presentado este escrito, se dé al mismo el trámite respectivo, ordenando su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES.

Todo lo cual firmo y rubrico, con el visto bueno del portavoz del Grupo en Madrid, a 4 de abril de 1978.—Miguel Riestra Paris. El Portavoz, Manuel Fraga Iribarne.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación de la pregunta que a continuación se inserta formulada por doña María Victoria Fernández-España, del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, sobre la caza en La Coruña.

Palacio de las Cortes, 5 de abril de 1978. El Presidente del Congreso de los Diputados, Fernando Alvarez de Miranda.

Excmo. Sr.: María Victoria Fernández-España Fernández-Latorre, Diputado por La Coruña de Alianza Popular, Vicepresidente 3.º del Congreso, al amparo del artículo 128 del Reglamento provisional, formula al Gobierno las siguientes preguntas, de las que desea obtener respuesta por escrito, con arreglo al artículo 133 del citado Reglamento.

Antecedentes de las preguntas:

En principio, todo ciudadano mayor de catorce años tiene derecho a cazar, sin más requisitos que estar en posesión de la Licencia de Caza y los exigidos por la Ley 1/1970, de 4 de abril, y su Reglamento de Ejecución 506/1971, de 25 de marzo.

Pero en la práctica esta libertad de cazar se encuentra limitada por la proliferación de los cotos privados, acogidos al artículo 16 de la Ley y 18 de su Reglamento.

La inmensa mayoría de los cazadores,

sin medios económicos para permitirse el lujo de estos cotos privados, tendría como solución cazar en terrenos libres, pero a consecuencia de los abusos que se cometen contra la regulación citada y la arbitrariedad que se ha seguido en la creación de la mayoría de estos cotos privados, este espacio de caza libre ha ido restringiéndose paulatinamente, de tal manera que mientras en 1971 había en Galicia sólo dos cotos de caza propiamente dichos, desde entonces se ha sobrepasado el centenar, continuando las peticiones ante ICONA.

Las irregularidades en los cotos privados son esencialmente de dos tipos:

Por un lado, no se controla el cumplimiento de lo ordenado en el artículo 15, punto 6, de la citada Ley, que establece que en los terrenos acotados la caza deberá estar protegida y fomentada, aprovechándose de forma ordenada.

Por otro lado, las citadas Ley y Reglamento establecen que los terrenos integrantes de estos cotos podrán pertenecer a uno o varios propietarios que se hayan asociado con esta finalidad, siempre que sean colindantes. Pero en realidad esta asociación no se cumple, sino que suele firmarse, por parte de los propietarios, la cesión de aprovechamiento cinegético en favor de un tercero o terceros, violándose el espíritu y la letra de la presente Ley, que quería precisamente evitar la especulación a que esto da lugar, cuando establecía en el artículo 18, punto 2, del Reglamento que: "Cuando participen en el acuerdo titulares distintos de los dueños, habrán de contar con la autorización escrita de los mismos".

Como fácilmente se deduce de esto, dada la peculiar distribución de la tierra en Galicia, extremadamente fragmentada, y la tremenda emigración rural, y otras diversas circunstancias, crear un coto privado cumpliendo las condiciones legales sería extremadamente difícil, por lo que arbitrariamente se ha incumplido este precepto en la realidad.

Ante esta situación, las protestas de los cazadores coruñeses "por libre" son unánimes y se ha solicitado el fin de estas arbitrariedades, así como la creación de un

gran coto provincial de caza controlado, con las adecuadas reservas y refugios de especies cinegéticas, a lo que ICONA no parece mostrar gran oposición.

No se niega la posibilidad de existencia de cotos privados, pero debidamente constituidos y controlados, y con un adecuado gravamen fiscal, dada su categoría de lujo, del que hoy generalmente se evaden.

Ante lo expuesto, y atendiendo a numerosas solicitudes de interesados, formulo al Gobierno las siguientes preguntas:

1.ª ¿Cuál es la postura del Gobierno ante la indicada petición del Coto Provincial de Caza de La Coruña?

2.ª Ante las arbitrariedades que en la creación de cotos privados se han producido, y la falta de control de éstos, ¿planea tomarse alguna medida?

3.ª ¿Existe la intención, por parte del Gobierno, de efectuarse una modificación o replanteamiento de la Ley de Caza actual, notablemente contestada por los sectores implicados?

Madrid, 5 de abril de 1978.—**María Victoria Fernández-España**.—El Portavoz, **Manuel Fraga Iribarne**.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación de la pregunta que a continuación se inserta formulada por doña María Victoria Fernández-España, del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, sobre discriminación a los emigrantes gallegos en Nueva York en las tarifas de vuelo.

Palacio de las Cortes, 5 de abril de 1978. El Presidente del Congreso de los Diputados, **Fernando Alvarez de Miranda**.

Excmo. Sr.: **María Victoria Fernández-España Fernández-Latorre**, Diputado por La Coruña de Alianza Popular, Vicepresidente 3.º del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 128 del Regla-

mento provisional, formula al excelentísimo señor Ministro de Transportes y Comunicaciones la siguiente pregunta, de la que desea obtener respuesta por escrito, de conformidad con lo establecido en el artículo 133 del citado Reglamento.

La pregunta se refiere a la notoria discriminación que a los emigrantes gallegos en Nueva York se les ha establecido en las tarifas de los vuelos con sus provincias, tras la aprobación por el C. A. B. de la inclusión de varios vuelos locales en las tarifas de los vuelos Nueva York-Madrid (Nueva York-Madrid-Málaga, ida y vuelta; Nueva York-Sevilla-Madrid, idem; Nueva York-Las Palmas-Madrid, idem; Nueva York-Madrid-Tenerife, idem), al precio de 345 dólares más impuestos, mientras que para desplazarse a Santiago, Coruña o Vigo vía Madrid el precio es 415 dólares más impuestos y a Madrid vía Santiago aún superior.

Se interesa de V. E. la explicación de esta discriminación y la actitud y medidas a adoptar para eliminarla, habida cuenta del considerable perjuicio a que nuestros emigrantes, ya notablemente abandonados en tantos otros aspectos, se les ocasiona con ella.

Madrid, 5 de abril de 1978.—**María Victoria Fernández-España**.—El Portavoz, **Manuel Fraga Iribarne**.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación de la contestación del Gobierno a la pregunta formulada por doña María Victoria Fernández-España, del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES, número 65, del día 1 de marzo de 1978.

Palacio de las Cortes, 5 de abril de 1978. El Presidente del Congreso de los Diputados, **Fernando Alvarez de Miranda**.

Excelentísimo señor: En relación con la pregunta formulada por doña María Victoria Fernández-España y Fernández-Latorre, del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, sobre la prestación de asistencia sanitaria a los ancianos, cuya publicación se realizó en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES, número 65, de 1 de marzo de 1978, tengo la honra de enviar a V. E. la contestación formulada por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, cuyo contenido es el siguiente:

“El Plan Nacional de Gerocultura y Geriatria, que está siendo elaborado por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, establece que:

1.1. En sincronización con el Plan Gerontológico, se está proyectando, el Plan de Centros Hospitalarios en el que se incluye la parte correspondiente al sector de ancianos, y que comprende la construcción y organización de Unidades Geriátricas con hospital de día en hospitales generales; los hospitales de día y los hospitales de media, larga estancia y convalecencia. Las anteriores directrices se aplicarán y adaptarán a cada provincia en razón del aprovechamiento de los recursos existentes y de las prioridades asistenciales y económicas, disponibles a corto, medio y largo plazo.

Las anteriores consideraciones serán de aplicación a la antigua Residencia de la Seguridad Social “Juan Canalejo”, que se encuentra en fase de reforma, para readaptarla al servicio, asignándole las funciones asistenciales que le correspondan, en consonancia con las posibilidades de sus instalaciones y las necesidades regionales y provinciales de la asistencia sanitaria.

1.2. Como planteamiento genérico organizativo, el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social hace suya la propuesta de crear una Comisión mixta local sanitario-social. En el esquema de desarrollo del Plan Gerontológico y Geriátrico se contempla una Comisión, como Organó Territorial, a nivel Provincial, del Comité Nacional Técnico de Gerocultura y Geriatria, cuyas misiones, competencias y composi-

ción se definirán en las próximas fases de la organización del Ministerio.

Por lo que se refiere a la asistencia a domicilio, el Plan Nacional de Gerocultura y Geriatria fija, entre sus objetivos prioritarios, el establecimiento y fomento de la ayuda a domicilio con la finalidad de facilitar, al máximo, la permanencia en el hogar, tanto del anciano sano como del enfermo.

1.3. En lo que se refiere al Hospital Municipal de Labaca, son igualmente de aplicación los objetivos del Plan de Centros Hospitalarios, reseñados en la respuesta 1.1, tanto en lo referente a su aprovechamiento y prioridades asistenciales, como a la creación de Unidades Geriátricas en los hospitales.

1.4. Los Hospitales Generales —que atienden enfermos de muy diversas especialidades—, y otros Hospitales Específicos, organizan las Enfermerías en distintas clases de Unidades diferentes entre sí, tanto en la planta física como en los recursos humanos y materiales, con el objetivo de prestar a cada enfermo la mejor atención que su padecimiento requiera.

La aplicación de este principio general evidencia la necesidad de diferenciar la Unidad de Enfermería de los disminuidos psíquicos y de los ancianos, aunque pueden y deben tener otros servicios sociosanitarios comunes.

1.5. El Plan Nacional de Gerocultura y Geriatria tiene prevista la incorporación al mismo de todas las instituciones que, en la actualidad, realizan atención a los ancianos, para evitar duplicidades, disminuir costos y aumentar la eficacia asistencial. El modelo de asistencia sectorizada se juzga como el más conveniente, partiendo del nivel primario, muy próximo al usuario, para que, sucesiva y progresivamente, pueda el anciano acceder, si fuera necesario, a los niveles y recursos de especialización más elevados. Se entiende, igualmente, que la asistencia ambulatoria y domiciliaria, cuando son posibles, son más humanas y económicas que el tratamiento hospitalario y que siempre es deseable la permanencia del anciano en el hogar, tan-

to desde el punto de vista sanitario como del social.

Todos estos objetivos que se citan, y otros muchos, forman parte del Plan Nacional de Gerocultura y Geriatria, que el Ministerio de Sanidad está elaborando actualmente.

1.6. La especialización geriátrica y gerontológica se consideran, en general, como necesaria; aunque lo verdaderamente más beneficioso es una suficiente formación gerontológica de todo el personal sanitario y no sanitario. Los equipos asistenciales de la tercera edad deben integrar los personal sanitario y no sanitario, y los órganos planificadores de dicha asistencia deben ser interdisciplinarios para dar cabida a los propios realizadores y sus beneficiarios.

Respecto del personal de asistencia a los

ancianos se ha solicitado del Ministerio de Educación y Ciencia la inclusión de la Gerontología y Geriatria en los programas docentes de la Licenciatura de Medicina y en los de Instructores Sanitarios, A. T. S., Asistentes Sociales y Fisioterapeutas.

El Plan prevé, también, la formación gerontológica suficiente de: Psicólogos, Terapeuta-ocupacionales, Podólogos, Higienistas, Dentales, Dentistas, Visitador-Sanitarios, Auxiliar-Sanitarios y Personal Voluntario”.

Lo que de orden del señor Ministro de Sanidad y Seguridad Social envió a V. E. a los efectos previstos en el artículo 133 del Reglamento provisional del Congreso.

Dios guarde a V. E.

El Secretario General de Relaciones con las Cortes, **Rafael Arias-Salgado y Montalvo**.

S E N A D O

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento provisional del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES del dictamen emitido por la Comisión de Justicia e Interior sobre el proyecto de ley de despenalización del adulterio y del amancebamiento, que ha sido ya distribuido a los señores Senadores.

Palacio del Senado, 7 de abril de 1978.—El Presidente del Senado, **Antonio Fontán Pérez**. El Secretario primero del Senado, **Víctor M. Carrascal Felgueroso**.

COMISION DE JUSTICIA E INTERIOR

La Comisión de Justicia e Interior, visto el Informe de la Ponencia designada para el estudio del proyecto de ley sobre Despenalización del adulterio y del amancebamiento, integrada por los Senadores doña María Dolores Pelayo Duque, don José Luis Figuerola Cerdán, don Antonio Ji-

ménez Blanco, don José Federico Carvajal Pérez, don José Plácido Fernández Viagas, don Manuel Villar Arregui y don Pedro Portabella Rafols, ha emitido el siguiente

D I C T A M E N

Artículo 1.º Se suprime la rúbrica del Capítulo VI del Título IX del Código Penal y se derogan los artículos 449 a 452 que integran el referido Capítulo. Asimismo se deroga el último párrafo del artículo 443 del Código Penal.

Art. 2.º Los artículos 84, 109, 756, 758, 852, 853, 854 y 855 del Código Civil se modifican en la forma que a continuación se indica:

Uno. Se deroga el número 7 y se traslada a su lugar el texto del número 8 del artículo 84.

Dos. El artículo 109 quedará redactado en la siguiente forma: “El hijo se presumirá legítimo, aunque la madre hubiere declarado contra su legitimidad”.

Tres. Los artículos 756, 758, 852, 853, 854 y 855 quedarán redactados como sigue:

“Art. 756. Son incapaces de suceder por causa de indignidad:

1.º Los padres que abandonaren a sus hijos o prostituyeran a sus hijas o atentaran a su pudor.

2.º El que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador, de su cónyuge, descendientes o ascendientes.

Si el ofensor fuere heredero forzoso, perderá su derecho a la legítima.

3.º El que hubiese acusado al testador de delito al que la ley señale pena aflictiva, cuando la acusación sea declarada calumniosa.

4.º El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte violenta del testador, no la hubiese denunciado dentro de un mes a la justicia, cuando ésta no hubiera procedido ya de oficio.

Cesará esta prohibición en los casos en que, según la ley, no hay la obligación de acusar.

5.º El que, con amenaza, fraude o violencia, obligara al testador a hacer testamento o a cambiarlo.

6.º El que por iguales medios impidiera a otro hacer testamento o revocar el que tuviese hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior.

Art. 758 Para calificar la capacidad del heredero o legatario se atenderá al tiempo de la muerte de la persona de cuya sucesión se trate.

En los casos segundo y tercero del artículo 756 se esperará a que se dicte la sentencia firme, y en el número cuatro, a que transcurra el mes señalado para la denuncia.

Si la institución o legado fuera condicional, se atenderá además al tiempo en que se cumpla la condición.

Art. 852. Son justas causas para la desheredación, en sus respectivos casos, las de incapacidad por indignidad para suceder, señaladas en el artículo 756 con los números 1.º, 2.º, 3.º y 5.º. Asimismo es causa justa para la desheredación haber cometido adulterio con el cónyuge del causante.

Art. 853. Serán también justas causas para desheredar a los hijos y descendientes, tanto legítimos como naturales, las siguientes:

1.ª Haber negado, sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda.

2.ª Haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra.

3.ª Haberse entregado la hija o nieta a la prostitución.

4.ª Haber sido condenado por un delito que lleve consigo la pena de interdicción civil.

Art. 854. Serán justas causas para desheredar a los padres y ascendientes, tanto legítimos como naturales, las siguientes:

1.ª Haber perdido la patria potestad por las causas expresadas en el artículo 169.

2.ª Haber negado los alimentos a sus hijos o descendientes sin motivo legítimo.

3.ª Haber atentado uno de los padres contra la vida del otro y no hubiere habido entre ellos reconciliación.

Art. 855. Serán justas causas para desheredar al cónyuge, las siguientes:

1.ª Las que dan lugar a la separación personal, según el artículo 105.

2.ª Las que dan lugar a la pérdida de la patria potestad, conforme al artículo 169.

3.ª Haber negado alimentos a los hijos o al otro cónyuge.

4.ª Haber atentado contra la vida del cónyuge testador, si no hubiere mediado reconciliación.

Para que las causas que dan lugar a la separación personal lo sean también de desheredación, es preciso que no vivan los cónyuges bajo un mismo techo.”

Palacio del Senado, 6 de abril de 1978.—El Presidente de la Comisión, **Gregorio Peces-Barba del Brío**. El Secretario de la Comisión, **Francisco Vicente Domínguez**.

Excmo. Sr. Presidente del Senado.

PRESIDENCIA DEL SENADO

El Pleno del Senado, en su sesión del día 4 de abril de 1978, ha aprobado un Anexo al Reglamento provisional de la Cámara, regulando la moción de censura y la cuestión de confianza, sin modificaciones con respecto al dictamen de la Comisión de Reglamento, que fue publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES, número 70, del día 30 de marzo de 1978.

Dado su carácter autonómico, este Anexo queda definitivamente aprobado.

Lo que se publica para general conocimiento.

Palacio del Senado, 5 de abril de 1978.— El Presidente del Senado, **Antonio Fontán Pérez**.—El Secretario primero del Senado, **Víctor M. Carrascal Felgueroso**.

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento provisional del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES del informe emitido por la Ponencia designada en el seno de la Comisión de Justicia e Interior para estudiar el proyecto de ley sobre modificación de determinados artículos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

"INFORME

La Ponencia designada para informar el proyecto de ley sobre modificación de determinados artículos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento provisional del Senado, ha examinado las once enmiendas presentadas dentro de plazo, acordando mantener el proyecto en su integridad, por razones de armonía interna del ordenamiento punitivo hoy vigente, absteniéndose de cualquier pronunciamiento que no se refiera a la elevación aritmética de las multas y cuantías y remitiendo toda otra considera-

ción a la reforma en trámite del Código Penal.

El señor Carvajal Pérez mantiene la totalidad de las enmiendas propuestas por el Grupo Socialista del Senado y el señor Baixeras Sastre se reserva la libertad de pronunciarse durante el debate en la Comisión.

Palacio del Senado, 3 de abril de 1978.— **José Federico Carvajal Pérez**.— **José Antonio Baixeras Sastre**. — **Acenk Alejandro Galván González**. — **Mateo Antonio García Mateo**. — **Antonio Pedrol Rius**. — **Miguel Primo de Rivera y Urquijo**. — **Luis Jacinto Ramallo García**".

Palacio del Senado, 4 de abril de 1978.— El Presidente del Senado, **Antonio Fontán Pérez**.—El Secretario primero del Senado, **Víctor M. Carrascal Felgueroso**.

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento provisional del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES de la interpelación formulada por el Senador del Grupo Parlamentario de Progresistas y Socialistas Independientes, don José Vicente Mateo Navarro, relativa a filosofía del Gobierno en materias de opinión y expresión.

Palacio del Senado, 5 de abril de 1978.— El Presidente del Senado, **Antonio Fontán Pérez**.—El Secretario primero del Senado, **Víctor M. Carrascal Felgueroso**.

A la Mesa del Senado:

José Vicente Mateo Navarro, Senador por Alicante, miembro del Grupo Parlamentario Progresistas y Socialistas Independientes, al amparo de lo establecido en el artículo 135 y concordantes del Reglamento provisional del Senado, formula petición de interpelación al Gobierno, de acuerdo con los siguientes antecedentes, originadores de preocupaciones en la opi-

nión y de algunas perturbaciones del orden público.

Durante los últimos meses se han producido, sin que la enumeración que sigue aspire a exhaustiva, detenciones y procesamientos, tales como los de los actores de la compañía catalana "Els Joglars" y el de uno de la vasca "Lagunak", los de cuatro colaboradores del semanario "Saida", dos estudiantes del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y cinco militantes valencianos del partido "Joven Guardia Roja", en base a presuntos atentados —en algún caso ya juzgados—, vejatorios para las Fuerzas Armadas y la institución monárquica, y se ha formado expediente por el Fiscal del Reino al abogado fiscal Jesús Vicente Chamorro, por infracción del Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Fiscal (artículo 124, 9, y 17), que debe entenderse derogado por la ratificación en 13-4-1977 de diversos pactos internacionales y su incorporación al Código Civil por Orden de 1-5-1977.

La grave trascendencia de tales actuaciones, en cuanto que sospechosas de vulnerar derechos humanos y libertades fundamentales recogidos y reconocidos en los pactos aludidos y en el "Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales" (Consejo de Europa), votado por unanimidad de esta Cámara en 18 de noviembre de 1977, mueve al interpelante a pedir al Gobierno se pronuncie sobre dos extremos que importan decisivamente a la prosecución del proceso de desarrollo y consolidación de las instituciones democráticas, al grado de seguridad exigible por todos los ciudadanos españoles, y, en definitiva, a la credibilidad que pueden merecer propósitos y manifestaciones de ejecución de los compromisos contraídos y plasmados en los "Pactos de la Moncloa":

1.º Solicita al Gobierno exponga cuál es su filosofía en materias de opinión y expresión y los criterios e intenciones con que interpreta y aplica en su praxis los textos internacionales adheridos.

2.º Esplice por qué, cinco meses después de establecidos los mencionados "Pactos de la Moncloa", el capítulo VII, referente al

"Código de Justicia Militar", no se ha desarrollado en ninguna "norma de cumplimiento" y permanecen intactos los límites tradicionales de la competencia de la jurisdicción militar.

Palacio del Senado, 30 de marzo de 1978.—**José Vicente Mateo Navarro**.—El Portavoz, **Manuel Villar Arregui**.

PRESIDENCIA DEL SENADO

La Mesa del Senado, oídos la Junta de Portavoces y el representante del Gobierno, ha decidido incluir en el orden del día de un próximo Pleno de la Cámara la pregunta presentada por el Senador don José Vicente Mateo Navarro, del Grupo Parlamentario Progresistas y Socialistas Independientes, sobre estado actual de los trámites para la elaboración del catálogo de parques naturales.

Palacio del Senado, 5 de abril de 1978.—El Presidente del Senado, **Antonio Fontán Pérez**.—El Secretario primero del Senado, **Víctor M. Carrascal Felgueroso**.

A la Mesa del Senado:

José Vicente Mateo Navarro, Senador por Alicante, miembro del Grupo Parlamentario Progresistas y Socialistas Independientes, solicita se dé traslado al Gobierno, al amparo del artículo 129 del Reglamento provisional del Senado, de la siguiente pregunta:

1.º ¿Se han iniciado los trámites para la elaboración del Catálogo de Parques Naturales, previsto en la vigente Ley sobre Régimen del Suelo, acordados por la Comisión Interministerial del Medio Ambiente en su sesión del 6 de septiembre de 1977?

2.º ¿En qué situación se encuentran tales trámites, si fueron acometidos a tenor del precitado acuerdo?

Justificación:

1.º El Acuerdo se adoptó sobre la propuesta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, que manifestó la

necesidad inaplazable de una actuación pública coherente y eficaz para la defensa de la Naturaleza.

2.º La evidencia, puesta de manifiesto en ambas Cámaras y reconocida por representantes cualificados de la Administración, del grave deterioro sufrido por el medio natural en España.

3.º La obtención de un inventario riguroso, provincia por provincia, de cuantos espacios naturales sean merecedores de protección especial.

4.º La promulgación de una normativa básica que prohíba la urbanización de los terrenos que resulten objeto de catalogación.

5.º La celebración, con posterioridad al Pleno del 6-9-1977, de diversas reuniones interministeriales tendentes a configurar las bases jurídicas del proyecto.

6.º La sospecha de paralización de los trabajos, reflejada en la protesta pública de la Federación del Movimiento Ecologista del Estado Español, ante la que se presume actitud dilatoria de la Dirección General de Urbanismo.

7.º Las consecuencias, posiblemente irreversibles, de la demora en la actuación.

Palacio del Senado, 30 de marzo de 1978.—José Vicente Mateo Navarro.—El Portavoz, Manuel Villar Arregui.

PRESIDENCIA DEL SENADO

La Mesa del Senado, oídos la Junta de Portavoces y el representante del Gobierno, ha decidido incluir en el orden del día de un próximo Pleno de la Cámara la pregunta presentada por el Senador don José Vicente Mateo Navarro, del Grupo Parlamentario Progresistas y Socialistas Independientes, don José Vicente Mateo Navarro, sobre funcionamiento de los servicios postales durante la pasada Semana Santa.

Palacio del Senado, 5 de abril de 1978.—El Presidente del Senado, Antonio Fontán Pérez.—El Secretario primero del Senado, Víctor M. Carrascal Felgueroso.

A la Mesa del Senado:

José Vicente Mateo Navarro, Senador por Alicante, miembro del Grupo Parlamentario Progresistas y Socialistas Independientes, solicita se dé traslado al Gobierno, al amparo del artículo 129 del Reglamento provisional del Senado, de la siguiente pregunta:

1.º ¿Cuáles son las razones en que fundamentó la Dirección General de Correos y Telecomunicación la circular por la que se paralizaron los servicios postales durante la pasada Semana Santa?

2.º ¿Cuáles las justificativas de unas asignaciones extraordinarias a los funcionarios por el mantenimiento de ese servicio en días oficialmente laborales, cuales fueron 20, 21 y 22 de marzo?

3.º Por extensión y analogía, ¿por qué se otorgan permisos especiales y colectivos a los funcionarios, en jornadas hábiles para todas las actividades privadas en España, después de haber realizado una reducción del calendario festivo?

Justificación:

1.º Es notoria la perturbación que tales medidas provocan en el normal desenvolvimiento de las comunicaciones, mercantiles, sociales, culturales e inclusive privadas, del país.

2.º Las posibles repercusiones negativas, en cuanto que sospechosas de privilegiar a quienes por el desempeño de funciones públicas deben servir a la comunidad, en una situación política y social en la que desde los máximos niveles de representación y responsabilidad gubernamental se apela a la solidaridad ciudadana.

3.º La incidencia financiera de un desembolso no presupuestado que, cualquiera que sea la cuantía resultante, incide en la economía española, trasgrediendo la rigurosa severidad en el gasto público a que el Gobierno está obligado por el "Acuerdo sobre el Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía" incluido en los "Pactos de la Moncloa".

Palacio del Senado, 30 de marzo de 1978.—José Vicente Mateo Navarro.—El Portavoz, Manuel Villar Arregui.

PRESIDENCIA DEL SENADO

La Mesa del Senado, oídos la Junta de Portavoces y el representante del Gobierno, ha decidido incluir en el orden del día de un próximo Pleno de la Cámara la pregunta presentada por el Senador del Grupo Socialista, don Celso Montero Rodríguez, sobre medidas que piensa tomar el Gobierno para abono de las indemnizaciones efectuadas a causa de la construcción de la red de carreteras conocida como "Accesos a Galicia".

Palacio del Senado, 5 de abril de 1978.—
El Presidente del Senado, **Antonio Fontán Pérez**.—El Secretario primero del Senado, **Víctor M. Carrascal Felgueroso**.

A la Mesa del Senado:

Celso Montero Rodríguez, Senador del Grupo Socialista, al amparo del artículo 129 y siguientes del Reglamento provisional de esta Cámara, dirige al Gobierno la siguiente pregunta para ser contestada en el Pleno del Senado:

Millares de pequeños propietarios gallegos han sido afectados estos últimos años por las expropiaciones forzosas efectuadas para construir la red de carreteras conocida como "Accesos a Galicia".

La Administración pública, al valorar estas propiedades (tierras o viviendas) para fijar la indemnización correspondiente, lo ha hecho generalmente con criterios totalmente desiguales según el grado de resistencia o voluntad de defenderse manifestadas por los afectados. Pero además, muchos de ellos no han percibido todavía las cantidades (o parte de ellas) adeudadas por el Estado, mientras el constante deterioro del poder adquisitivo de la moneda está reduciendo año tras año el valor real de dichas indemnizaciones. De ellos, la gran mayoría son pequeños propietarios que han debido hacer frente en este tiempo a la compra de pisos o terrenos con que sustituir a los expropiados, viéndose consiguientemente en graves apuros económicos.

Por todo ello, pregunto:

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para que cuanto antes se les abone las indemnizaciones adeudadas, sobre todo a las familias de economía más modesta? ¿Cómo piensa compensar a todas esas familias por el deterioro del valor monetario sufrido en estos años debido a la constante inflación y al excesivo retraso en el cobro?

Palacio del Senado, 30 de marzo de 1978.—**Celso Montero Rodríguez**.

Precio del ejemplar 12 ptas.
Suscripción Madrid y Provincias. 500 »

Suscripciones y venta de ejemplares:

SUCESORES DE RIVADENEYRA, S. A.

Paseo de Onésimo Redondo, 36
Teléfono 247-23-00. Madrid (8)

Depósito legal: M. 12.580 - 1961

RIVADENEYRA, S. A.—MADRID